

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C., dos (02) de marzo de dos mil veinte (2020)

MAGISTRADO PONENTE: FRANKLIN PÉREZ CAMARGO

NATURALEZA: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

RADICADO: 250002315000**20200040200**

ASUNTO: No avoca conocimiento de control inmediato de legalidad del decreto 031 de 2020 expedido por el municipio de Quipile- Cundinamarca

En virtud de lo dispuesto en el artículo 136 del CPACA y el artículo 20 de la Ley 137 de 1994¹, se estudia por parte del Despacho si se avoca o no el control inmediato de legalidad del Decreto No. 031 de 18 de marzo de 2020 expedido por el Municipal de Quipile Cundinamarca mediante el cual *“se declara la situación de calamidad pública en el Municipio de Quipile Cundinamarca, se elabora Plan de Acción Específico para la atención y mitigación de los efectos adversos del COVID-19, en colaboración con el consejo municipal de gestión del riesgo de desastres y la Oficina de Desarrollo Económico y Social en coordinación con la ESE Hospital de Anolaima, y se dictan otras disposiciones”*; repartido al suscrito Magistrado

Lo anterior conforme con lo preceptuado en el Acuerdo número PCSJA20-11529 del 25 de marzo de 2020, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que exceptuó de la suspensión de términos adoptada en los acuerdos PCSJA20-11517 y 11526 de marzo de 2020, las actuaciones que adelanten el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos con ocasión del control inmediato de legalidad.

CONSIDERACIONES

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS, calificó el brote de COVID-19 (Coronavirus) como una pandemia, por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, declaró *“la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020”* y ordenó a los jefes y representantes legales de entidades públicas y privadas, adoptar las medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID19 (Coronavirus).

¹ **Artículo 20.** Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.

Mediante Decreto Nacional No. 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario.

Tal y como se hizo referencia anteriormente, tanto el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 establecen la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que en este caso recae sobre los Tribunales Administrativos en única instancia en virtud de lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 151 del CPACA; sobre el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos, que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales.

Por ende, solo es de conocimiento por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aquellos decretos que se dicten durante el estado de excepción y como desarrollo de los decretos legislativos dictados en este periodo.

El Decreto 031 del 18 de 2020 proferido por la Alcaldía Municipal de Quipile -Cundinamarca advierte que, conforme lo dispone la Constitución Política de Colombia en su artículo 2 el deber que tienen las autoridades de la república de proteger a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y creencias, y ante la situación de peligro a la que está expuesta el Municipio por motivo del virus COVID 19, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la rueda de prensa que tuvo lugar el día 11 de marzo de 2020, por lo decidió declarar la calamidad pública en el Municipio. Agregó que ante la situación de emergencia el presidente de la república para el día 12 de marzo de la presente anualidad, declaró la emergencia sanitaria sobre el territorio, lo que con llegó a que el Gobernador de Cundinamarca a través del Decreto 137 del 12 de marzo declarara la alerta amarilla sobre el departamento y adoptara medidas para contener la pandemia, lo que después ratifico a través del Decreto 140 del 16 de marzo de la misma anualidad en la que declaró la situación de calamidad pública en la jurisdicción del departamento de Cundinamarca.

Finalmente, argumentó que conforme a lo anterior y con base en lo regulado en la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, que entre otras, faculta a los alcaldes y gobernadores previo concepto favorable del Consejo Departamental Distrital o municipal de Gestión del Riesgo podrá declarar la situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción; era procedente declarar la situación de calamidad pública en el Municipio de Quipile Cundinamarca para adelantar las acciones en fase de preparativos para la respuesta y recuperación frente al brote de enfermedad por Coronavirus (Covid-19).

No obstante, visto el contenido del referido acto administrativo, encuentra el Despacho que el mismo no fue proferido en desarrollo a la declaratoria del estado de emergencia, económico, social y ecológica en todo el territorio Nacional, como consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19, mediante la expedición del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 emanado por el Presidente de la República, o con fundamento en los demás decretos legislativos suscritos por el Gobierno Nacional en torno a tal declaratoria, por el contrario, advierte que el Decreto 031 del 18 de marzo de 2020, contiene como sustento i) el Decreto 137 del 12 de marzo de 2020 y el Decreto 140 del 16 de marzo de 2020, por medio del cual el Gobernador de Cundinamarca declaró la alerta amarilla y la calamidad pública en el Departamento; y ii) la situación de calamidad pública que atraviesa el Municipio de Quipile por el brote de la enfermedad denominada Coronavirus (COVID-19), regulada por la Ley 1523 del 24 de abril de 2012², que no requiere de la declaratoria del estado de excepción como el que trata el artículo 215 Superior y que fue decretado a nivel nacional a raíz de la grave e inminente situación de emergencia sanitaria del país.

Por consiguiente, no resulta procedente en este caso darle trámite el control inmediato de legalidad del mentado decreto municipal, de acuerdo con lo establecido por los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, en la medida que dicho decreto corresponde a las atribuciones propias como *policía administrativa* que se encuentran en cabeza de las autoridades de la rama ejecutiva del poder público y no de las excepcionales competencias que la Constitución otorga al Ejecutivo para declarar el *estado de excepción* y sus desarrollos, en tanto el control inmediato de legalidad opera única y exclusivamente frente a los decretos que expidan las autoridades (nacionales, regionales, departamentales o locales) en *desarrollo* de los decretos legislativos que expida el Gobierno Nacional para que la jurisdicción contenciosa efectúe un juicio de legalidad amplio sobre el ejercicio de esas competencias excepcionales, pues para controlar las competencias que se ejercen en condiciones de normalidad, el ordenamiento prevé los medios ordinarios, así la situación de normalidad se altere, dado que para ello el ejecutivo en todos sus niveles, cuenta con herramientas también ordinarias (policía administrativa) y sólo cuando la situación se hace extraordinaria, se decreta un estado de excepción, se profieren decretos legislativos y en desarrollo de los mismos, se expidan decretos territoriales dando alcance a esas atribuciones *excepcionales*, se activa el control inmediato de legalidad.

Con todo, cabe resaltar que la improcedencia del control inmediato de legalidad (que es automático e integral) sobre este decreto no comporta el carácter de cosa juzgada de la presente decisión, pues no se predicen los efectos procesales de dicha figura en cuanto a su inmutabilidad, vinculación

² Por la cual se adopta la política Nacional de Gestión del Riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones"

y definición, y por tanto será pasible de control judicial ante esta Jurisdicción, conforme a los otros medios de control (observaciones del señor Gobernador, nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho) en aplicación el procedimiento reglado en la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

Así las cosas, al no cumplirse con los requisitos mínimos necesarios para iniciar el proceso de control automático de legalidad, no se avocará conocimiento en el asunto de la referencia.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: NO AVOCAR conocimiento de control inmediato de legalidad del Decreto 031 del 18 de marzo de 2020, proferido por el Alcalde Municipal de Quipile (Cundinamarca), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: La presente decisión no hace tránsito a cosa juzgada.

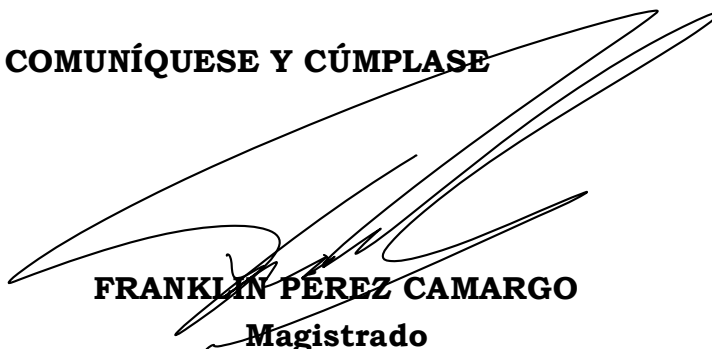
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a la Alcaldía del Municipio de Quipile – Cundinamarca, a través de la Secretaría de la Sección y por el medio más expedito y eficiente, considerando el buzón de notificaciones judiciales previsto por la autoridad Municipal. Así mismo **NOTIFICAR** al agente del Ministerio Público delegado ante este despacho.

CUARTA: COMUNICAR la presente decisión a través de la Secretaría de la Sección, mediante un aviso en la página web de la rama judicial:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-decundinamarca/>.

QUINTA: Se **ORDENA** al Municipio de Quipile y la Gobernación de Cundinamarca **PUBLICAR** esta decisión en la página web de la entidad territorial³.

SEXTA: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



FRANKLIN PÉREZ CAMARGO
Magistrado

³ La secretaría deberá cumplir lo establecido por la Circular C-010, C-011 y 012 del 31 de marzo de 2020 expedidas por la presidenta de esta corporación.